

LA RIOJA

EDITA NUEVA RIOJA, S.A.

Director: José María Esteban Ibáñez

Subdirector:

José Luis Prusén de Blas

Jefe de Edición:

Luis Sáez Angulo

Jefe de Fin de Semana:

Marcelino Izquierdo Vozmediano

Jefes de Área:

Jorge Alacid López (La Rioja), José

Antonio del Río Sacristán (Deportes), Isabel Martínez Ramos (Vida

y Ocio), José Ángel Martínez

Medrano (Edición Gráfica)

EDITORIAL

Crisis PP-CiU

El Gobierno y el PP han decidido congelar las relaciones con CiU y abrir un período de reflexión de varios meses antes de optar o no por la ruptura. Javier Arenas mantiene que su partido ya no podía aguantar por más tiempo los «insultos» ni las «ambigüedades calculadas» de sus todavía bien avenidos socios. El detonante de la crisis ha sido el apoyo tácito prestado por CiU al 20-J, pero el memorial de agravios es largo. Los catalanistas, que necesitan al PP para mantener la *Generalitat*, no se sumaron al Pacto Antiterrorista, votaron en contra de la ley de Estabilidad Presupuestaria, no apoyaron la convalidación del decreto ley de reforma del desempleo y se mostraron muy exigentes con la ley de Partidos.

Durante la pasada legislatura, el Gobierno de Aznar logró la estabilidad parlamentaria gracias al apoyo de Convergencia, que tenía la llave de la mayoría. Pero hace dos años y medio se volvieron las tornas, ya que CiU sólo alcanzó en las autonómicas catalanas una exigua mayoría relativa. Jordi Pujol necesita ahora al PP en el *Parlament* y, en cambio, tras las últimas generales, su concurso es innecesario en Madrid. En estas circunstancias, la relación se ha enfriado paulatinamente. Pujol ya no es el socio preferente, ni recibe información privilegiada, por más que Aznar le ofreciera en otoño pasado que CiU formara parte del Gobierno de Madrid, una posibilidad muy asimétrica que resultaba difícil de aceptar por los nacionalistas.

Al margen de las pequeñas querrelas entre partidos, la actual mayoría política del PP no debería perder la perspectiva ni desconocer que el nacionalismo catalán, moderado y con altura de miras, ha prestado en esta legislatura servicios importantes al Estado. En cuanto se hizo evidente la desmesura del PNV en sus planteamientos radicales, Pujol hizo saltar por los aires la Declaración de Barcelona. Y, pese a las dudas, CiU ha rubricado la ley de Partidos, lo que concede a esta norma un plus muy valioso de legitimidad.

El PP debe medir el alcance de su presión sobre CiU, porque no le interesa una anticipación electoral en Cataluña, como ha insinuado Artur Mas. Según algunas encuestas, Pasqual Maragall ganaría a Mas —sucesor de Pujol— y el centro izquierdo, al centro derecha. Parece que al PP le es más conveniente que se celebren primero las elecciones municipales y autonómicas, y no unas catalanas en las que, al menos de momento, los socialistas tienen muchas posibilidades de vencer. Tanto el PP como CiU, tras años de fructífera colaboración, deben tener presente que el carrusel político puede llevarles a la tesitura de necesitarse de nuevo.

El buen gobierno de la empresa

El sistema de gobierno de las empresas, uno de los pilares de la economía de mercado y de la sociedad liberal, ha dado motivos en los últimos tiempos a las críticas. Los ejemplos de Enron y de Andersen, a nivel mundial, y otros de menor entidad a nivel nacional, han abierto un debate de fondo cuyas primeras conclusiones revelan que estos llamativos casos son las manifestaciones externas de una enfermedad que, en mayor o menor medida, afecta al corazón del mundo empresarial. El problema es sencillo de ver, pero su solución es difícil de encontrar. La soberanía empresarial reside en las juntas generales de accionistas que, con mayorías simples o reforzadas, pueden decidir sobre todos los aspectos fundamentales de su desarrollo. Pero la complejidad del mundo de los negocios, los sofisticados sistemas de blindaje y la propia dificultad práctica de celebrar juntas generales en períodos breves han obligado en la práctica a ceder una buena parte de esa soberanía a otros órganos de gobierno; fundamentalmente, al consejo de administración y, sobre todo, a la presidencia. Para solucionar estas complicaciones, se ha procedido a concentrar el poder en los presidentes y se han generalizado las auditorías externas.

Falla la economía europea

ANTONIO PAPELL

Las cuestiones más vistas —la inmigración, la ampliación de Europa, la reforma institucional que han sido temas 'estrella' de la presidencia española de la UE han impedido ver un nuevo y grave incumplimiento de los pactos de estabilidad, que amenaza seriamente no sólo el porvenir del euro —los economistas norteamericanos más relevantes siguen presagiando el fracaso de la moneda única europea sino también el futuro económico de algunos países, como España, que empiezan a experimentar en carne propia las consecuencias negativas de la indisciplina económica de nuestros principales socios comunitarios.

En Maastricht, cuando se diseñó la moneda única, se fijaron las condiciones de acceso: los países que adoptaran el euro deberían mantener unos déficit públicos inferiores al 3% (y una deuda menor del 60% del PIB, etc.). Más tarde, el Tratado de Ámsterdam incluía el pacto de estabilidad, que obligaba al equilibrio presupuestario en principio en el 2002, aunque después se aplazó tal condición hasta el 2004. Pero en el 2000, por «razones nacionales», Francia y Alemania (y también España) bajaban sensiblemente sus impuestos sin ninguna coordinación europea.

Al año siguiente, Irlanda se negaba a adoptar medidas, recomendadas por Bruselas, para contener su excesiva inflación. A principios de este mismo año 2002, Schröder ha conseguido eludir la advertencia que, de acuerdo con los tratados, debía lanzarle la Comisión Europea por la deriva de sus finanzas públicas, cuyo déficit crece hasta extremos alarmantes, y ello ha permitido también a Portugal sobrepasar impunemente los límites de Maastricht... En la cumbre de Barcelona, en marzo pasado, los Quince, a instancias de la Comisión y de la presidencia española, se comprometieron solemnemente a conseguir el déficit cero en el 2004. Y ello a pesar de que Francia debía acudir a las urnas pocas semanas después y de que los entonces presidente de la república y primer ministro, Chirac y Jospin, habían incluido nuevas y sustanciales bajadas de impuestos en sus respectivos programas electorales. Poco duró la solidez de aquel acuerdo político: la pasada semana, en el Ecofin celebrado en Madrid y en el Consejo Europeo de Sevilla, se consiguió un consenso mucho más débil: Alemania se ha comprometido al déficit cero en el 2004 si consigue tasas de crecimiento económico del 2,5% en los dos próximos años (por si acaso, el candidato conservador, Stoiber, ya ha aplazado la fecha hasta el 2007), en tanto Francia hará lo propio sólo si el crecimiento económico es del 3%. Como es impensable en ambos casos que las economías se aceleren hasta ese punto, ya puede descartarse el equilibrio presupuestario en el año 2004.

La Comisión Europea es consciente de que no basta con el equilibrio presupuestario para garantizar la solvencia de la moneda única: es preciso también que los Estados hagan economías para garantizar la financiación a medio y largo plazo de sus gigantescos sistemas de pensiones, amenazados por la demografía. Y se avanza ya el establecimiento de reglas que no sólo afectarán a la cuantía del gasto público, como hasta ahora, sino también a su

calidad. Se trata de impedir, por ejemplo, que bajen los impuestos aquellos Estados que tienen todavía déficit significativos en educación, en sanidad, en investigación o en seguridad. Razonablemente, se camina hacia una armonización de las principales partidas presupuestarias: las destinadas a sostener los grandes servicios públicos, sobre los que existe un consenso sustancial en Europa. Pero difícilmente se avanzará en este terreno, en que se dirimen cuestiones de soberanía, cuando no se consigue disciplina en cuestiones más generales.

Esta incapacidad de Europa para conseguir acuerdos de armonización de las políticas económica y presupuestaria no es inocua, ni en lo concerniente a la salud de la moneda única ni en lo relativo al acomodo de unos países con respecto a otros. Así, España está padeciendo gravemente las veleidades financieras de Alemania, por la sencilla razón de que, como es natural, la política monetaria dictada por el Banco Central

Europeo está mucho más atenta al gigante germano que a la periférica España. El vicepresidente Rato se lamentaba hace pocos días de que en nuestro país el precio de las hipotecas es el mismo que en Alemania, pese a que aquí tenemos una inflación mucho mayor.

Y, en efecto, el Banco de España acaba de dar a conocer que el endeudamiento de las familias se ha duplicado en los últimos siete años. El crédito fácil y abundante está provocando incontenible inflación en nuestro país, sin que podamos ya actuar sobre las herramientas de política monetaria —los tipos de interés, sobre todo—, capaces de remediar este desequilibrio.

Verdaderamente, estos asuntos son áridos y poco vistosos, pero no por ello irrelevantes. O se impone el buen sentido, al margen de demagogias electorales, o en cuanto sobrevenga una verdadera crisis económica, Europa saltará por los aires, víctima del particularismo y la insolidaridad.

CRÓNICA CON SAL

De puertas adentro

MANUEL ALCÁNTARA

Las apariencias siguen engañando. Ese tipo de español medio jubiloso y ruidoso, que tanto ha sufrido a distancia con la selección y tanto espera gozar con las vacaciones, es un ser atormentado por las deudas. Cuando se queda solo en casa y hace cuentas comprueba algo que ya sabía: que tiene más trampas que las viejas películas de Fu Man Chu. Los bajos tipos de interés, tan ligados a los bajos instintos de la banca, han duplicado en siete años las deudas familiares.

Los expertos aseguran que la culpa es del euro, cuya llegada determinó usuras más suaves. La gente se confió, sin pensar que las deudas son un privilegio de los ricos que jamás pueden permitirse los pobres. Siempre he creído que la famosa frase «pedid y se os dará» está incompleta, ya que no especifica por dónde. Se pidió mucho y el resultado está ahora a la vista: las deudas contraídas por las familias españolas han pasado de representar el 40% de su renta bruta disponible a suponer el 77%.

Como nadie ignora, comprar una vivienda es lo que hace que muchos compatriotas no puedan vivir. Ahora ha vuelto a encarecerse su precio y en los hogares se tiene que destinar más dinero que antes a conservarlos. Una cuota mensual media dedicada a atender los créditos hipotecarios que está por encima del salario mínimo interprofesional. La única solución es retraer el consumo, o sea, gastar menos en vestir y en comer y, lo que es peor, en beber y en divertirse.

Decía el tío Oscar que el dinero únicamente le interesa a la gente que piensa pagar sus deudas, pero las cosas han cambiado: también interesa a los que piensan pagar sus viviendas. Hubo un tiempo en el que las únicas deudas que había que pagar sin falta eran las de juego, ya que se consideraban de «honor». Las otras se aplazaban o se olvidaban y ni agradecidas ni pagadas. Sólo una ventaja apreciable ofrece tener deudas: estar siempre en la memoria de los acreedores. Es la mejor manera de luchar contra el olvido.

RAMÓN

